

## ¿QUIÉN MATÓ A AGUIRRE? ACERCA DE LA REPRESIÓN PERONISTA DURANTE LA HUELGA AZUCARERA DE 1949

**ESTEBAN PILIPONSKY (UNT)**

Universidad Nacional de Tucumán

Av. Benjamín Araoz 800 (cp. 4000)

[epili50@gmail.com](mailto:epili50@gmail.com)

### **Resumen**

En 1949 se desarrolló en Argentina, con epicentro en Tucumán, la huelga azucarera más grande de su historia. La misma fue duramente atacada y reprimida. La violencia ejercida por el gobierno peronista se extendió con particular encono hacia militantes de izquierda. Este ataque implicó desde la expulsión de aquellos de sus cargos en los sindicatos, hasta encarcelamientos, secuestros, torturas, y el asesinato de Antonio Aguirre, afiliado al Partido Comunista y miembro del sindicato de mozos de la provincia.

El presente trabajo examina las circunstancias en que se produjo dicho crimen, decisivas para una adecuada comprensión de la política del régimen populista local en relación con el movimiento obrero y sindical.

### **Abstract**

In 1949 it took place in Argentina, with its epicenter in Tucuman, the largest sugar strike in its history. It was severely attacked and repressed. Violence by the Peronist government was extended with special bitterness toward leftists. This attack involved from the expulsion of those from their positions in the unions, to imprisonment, kidnapping, torture, and murder of Antonio Aguirre, member of the Communist Party and member of the union of waiters in the province. This paper examines the circumstances in which the crime occurred, crucial for a proper understanding of the politics of the populist regime in connection with the labor and trade union movement.

**Palabras claves:** Huelga Azucarera, peronismo, represión, consenso, Tucumán.

**Keywords:** Strike Sugar, Peronism, repression consensus, Tucuman

## ¿QUIÉN MATÓ A AGUIRRE? ACERCA DE LA REPRESIÓN PERONISTA DURANTE LA HUELGA AZUCARERA DE 1949

ESTEBAN PILIPONSKY (UNT)

[epili50@gmail.com](mailto:epili50@gmail.com)

### Introducción

Antonio Aguirre era un obrero tucumano, afiliado a la Unión de Mozos y Anexos y al Partido Comunista (PC). El 27 de noviembre de 1949, sobre el final de la Gran Huelga Azucarera que duró 46 días, fue secuestrado de su casa, torturado y, finalmente asesinado en el subsuelo de la Casa de Gobierno, donde funcionaba la Comisaría N° 1 de San Miguel de Tucumán.

Dicho crimen se produjo en un momento de creciente represión contra los trabajadores de diferentes sectores, cuyas luchas se vieron incrementadas a medida que el modelo económico del peronismo gobernante mostraba sus primeros síntomas de agotamiento. El presente artículo se propone relatar los sucesos que rodearon aquel hecho, situándolo en el contexto de la compleja relación entre el gobierno y los sindicatos durante el mencionado régimen.

En los últimos 30 años la historiografía dominante sobre los orígenes del peronismo que analiza los vínculos entre el gobierno y el movimiento obrero, ha centrado su análisis en los consensos alcanzados por ambos. Sin negar los aspectos autoritarios de dicho régimen, en sostenido aumento a lo largo de su gestión, los principales trabajos sobre el tema carecen de un análisis profundo acerca de la coacción ejercida por el mismo. Esto puede observarse en dos aspectos fundamentales: primero en la falta de estudios sobre los casos puntuales de represión del sindicalismo y su magnitud principalmente entre los años '45 y '49; y en segundo lugar, en el escaso o nulo peso concedido a los aspectos coercitivos para explicar la alianza entre un sector del gremialismo y la nueva elite gobernante.

Desde el paradigmático trabajo de Juan Carlos Torre, existe una tendencia a ponderar los espacios de autonomía del movimiento obrero, dejando de lado el aspecto represivo como factor para comprender dicha alianza.<sup>1</sup> El presente trabajo es una aproximación, aun preliminar, que intenta llenar dicho vacío historiográfico en los aspectos antes mencionados, en este caso en particular mediante el estudio del asesinato de un obrero gastronómico en el marco de la lucha obrera conocida como la Gran Huelga Azucarera de 1949.

La muerte de Aguirre tuvo una importante resonancia entre los contemporáneos, y aun es un hecho presente en la memoria colectiva de muchos viejos activistas de la provincia, que vivieron o estudiaron el período. En este artículo se pretende relatar lo sucedido pues a pesar del fuerte impacto que tuvo el caso, en la bibliografía académica es solo mencionado ligeramente en algunos textos sobre la huelga de los azucareros. Con el afán de enmarcar este asesinato, se buscará contextualizar al mismo en un entorno de creciente ebullición y aumento de la represión a los obreros en Tucumán, provincia donde se produjeron estos sucesos.

La tortura sufrida junto con otros militantes políticos y gremiales, y el posterior asesinato de aquel obrero comunista estaban vinculados con su posición en el movimiento obrero y en la Gran Huelga. Aguirre había sido designado clandestinamente por los sectores gremiales más combativos, como el nexo entre los sindicatos azucareros en huelga y las organizaciones de

---

<sup>1</sup> Una rápida síntesis de estas obras podrían ser: Torre, Juan Carlos, *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990. Doyon, Louise, *Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006. Inigo Carrera, Nicolás, *La estrategia de la clase obrera, 1936*, Buenos Aires, La Rosa Blindada: PIMSA, 2000. Schiavi, Marcos, *El poder sindical en la Argentina peronista (1946-1955)*, Buenos Aires, Imago Mundis, 2013. Contreras, Gustavo, "Movimiento obrero, sindicalismo y política durante el primer peronismo", Mar Del Plata, UNMDP, 2012 (mimeo).

trabajadores de la capital provincial.<sup>2</sup> Desde la creación de la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar) en 1944, este complejo acercamiento entre unos y otros había sido sistemáticamente boicoteado por el gobierno y por las cúpulas sindicales en busca de poder dentro del partido gobernante. En el contexto de gran ebullición de noviembre de 1949, con una huelga de más de un mes de los azucareros y otro paro general en la provincia que había dejado de saldo la muerte de un obrero automotor y numerosos encarcelamientos, una posible solidaridad del conjunto del movimiento obrero provincial con la FOTIA era un escenario insostenible para el gobierno nacional y local.

Sumado a ello, Aguirre era un militante comunista que pertenecía a la Unión de Mozos y Anexos de Tucumán. Este tradicional sindicato, fundado en 1906, había logrado mantener una importante autonomía respecto al peronismo en comparación a las demás organizaciones de trabajadores, lo cual se reflejaba en la permisibilidad hacia los afiliados abiertamente identificados con partidos diferentes al gobierno. Si bien no era un sindicato grande en tamaño, era un importante referente del movimiento obrero de la provincia, y se había mostrado resistente hacia la creciente jerarquización e identificación con el oficialismo del conjunto de movimiento obrero. Todo ello generó un ataque directo hacia la Unión por parte del ejecutivo provincial durante 1949, mediante el patrocinio de un sindicato paralelo al cual beneficiaba con trabajos temporales, típicos de esta actividad, en instituciones públicas, que antes favorecían a la vieja organización.

En este contexto, la militancia comunista de Aguirre junto a su pertenencia a la Unión de Mozos, pero fundamentalmente su participación en la huelga azucarera, lo volvían un blanco predilecto para la represión que decidieron ejercer las autoridades frente a los conflictos obreros.

El análisis del asesinato de Aguirre nos permite iluminar el período en cuestión, al menos, en dos sentidos. Por un lado, la reacción entre los trabajadores ante dicho homicidio y los demás casos de torturas, desde los sectores más adictos al gobierno hasta los opositores, muestra la hegemonía lograda por el peronismo en torno a la idea de que todo cuestionamiento al régimen era potencialmente una acción desestabilizadora del mismo. Mientras, el accionar gubernamental represivo era justificado en tanto enfrentaba aquellas supuestas conspiraciones. Por el otro lado y como causa de lo anterior puede inferirse que, como venimos buscando demostrar en trabajos anteriores, la represión del régimen contra los trabajadores organizados no surgió con el agotamiento del modelo peronista hacia 1949 sino que venía en ascenso desde el surgimiento del mismo. Este paulatino ascenso del carácter represivo del gobierno en paralelo al aumento de su popularidad, ayuda a explicar la reacción mayormente condescendiente hacia el ejecutivo nacional frente a los hechos aquí relatados entre importantes sectores del movimiento obrero.

### **La Gran Huelga Azucarera**

Entre el 14 de octubre y el 29 de noviembre de 1949 tuvo lugar la huelga más larga y una de las más significativas de la historia de los obreros y empleados de la industria azucarera de todo el país.<sup>3</sup> A pesar de la identificación de la mayoría de los trabajadores y de las organizaciones obreras del sector con el peronismo, durante todo el curso de la huelga el gobierno nacional, lejos de ubicarse como árbitro, lideró el enfrentamiento contra la misma. Apartó a la patronal de la disputa y, en cambio, movilizó a los diversos niveles del Estado para contrarrestar la medida: el Ministerio de Trabajo y Previsión la declaró ilegal, los poderes ejecutivo y legislativo provinciales presionaron constantemente a los huelguistas para que abandonasen su postura, y las fuerzas de seguridad reprimieron duramente a los mismos. Se sumaron a esta persecución además, algunos

---

<sup>2</sup> Entrevista a Samuel Kaufman, 21/10/2014.

<sup>3</sup> He analizado en otro artículo los pormenores de esta huelga: Piliponsky, Esteban, "La gran huelga azucarera de 1949 y la autonomía sindical. El consenso acerca de la represión y la coerción", *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, 5, 2014. A continuación haré una breve síntesis de la misma para contextualizar el hecho aquí estudiado. Las principales referencias sobre dicho conflicto han sido consultadas en los diarios *La Gaceta*, *La Prensa* y *La Época*.

actores fundamentales con los que el régimen mantenía una línea directa: la CGT (Confederación Nacional del Trabajo) junto a un conjunto de sindicatos adictos, y la prensa oficialista.

Una vez sofocada la huelga, el gobierno resolvió unilateralmente el principal reclamo obrero –el aumento salarial–, haciéndose cargo de más de la mitad del mismo, y tomó el mando de las represalias que implicaron expulsiones partidarias, sindicales y en los puestos de trabajo, sin dar posibilidad a los damnificados de defenderse. Finalmente, mantuvo intervenida la FOTIA durante más de un lustro, hasta la caída del régimen en 1955, medida que perduró hasta 1958.

Con el fin de aislar la lucha de los azucareros el peronismo apeló a su premisa, hegemónica entonces, de que todo diálogo con fuerzas “ajenas” al justicialismo atentaba contra el mismo. Logró así restringir el alcance de la huelga de los azucareros, que se cuidaron de no expandirla a otros sectores políticos y sociales, pese a que contaban con un contexto favorable para hacerlo, limitándose mayormente a tibios pedidos de apoyo solidario moral o material. De todos modos la lealtad y/o táctica mostrada por la FOTIA, auto reprimiéndose la generalización del conflicto, no impidió que el gobierno inculpara a toda su dirección como “traidores” al régimen.

El principal reclamo de la lucha obrera era un 60% de aumento salarial, ya que sus ingresos se encontraban notoriamente retrasados respecto a otros obreros industriales. Junto a ello se solicitaba que la Dirección del Azúcar, creada por Perón con sede en Buenos Aires, fuese trasladada a Tucumán para una mejor y mayor efectividad de sus funciones específicas.<sup>4</sup> Contemplando que la provincia producía el 80% del azúcar en el país, dividiéndose el resto entre Jujuy, Salta y Santa Fe, los obreros consideraron la necesidad de que el centro de decisiones de las políticas del sector estuviese geográficamente más cercano al lugar de elaboración. El reclamo, compartido por los empleadores, fue desatendido.

Sumado al retraso salarial de los azucareros, el cual ya había provocado un paro de 5 días en 1948 que logró un insatisfactorio 20% de incremento, la fuerte demanda salarial de 1949 debe enmarcarse en el proceso de quita de compensaciones del gobierno en paralelo a un aumento del precio final del producto. El congreso nacional había aprobado la moción de dos diputados tucumanos oficialistas, los ex secretarios generales de la FOTIA René Villacorta y Manuel Lema, para quitarles a la industria las compensaciones que otorgaba el gobierno nacional. Esta propuesta, en línea con la nueva política de austeridad del gasto público auspiciada por Perón, fue acompañada luego por una resolución del ejecutivo nacional que autorizó un aumento del costo final del producto en un 110%.

Tal incremento entusiasmó a los obreros, quienes se ilusionaron con que la medida iría acompañada con un alto porcentaje de incremento en sus salarios. Sin embargo debe contemplarse que el precio del azúcar estaba fuertemente retrasado, lo que se agravaba con la reciente quita de subsidios. La Ley Saavedra Lamas de 1912 había impuesto un límite de \$0.41 el kilogramo para el consumidor final, que se mantuvo hasta terminada la Segunda Guerra Mundial. Sólo como ejemplo, en el mismo período el precio de la carne aumentó de \$0.32 a \$0.85 el kilo. La política del Estado en la materia, “se propuso mantener indefinidamente deprimido el precio del azúcar producido en el país”.<sup>5</sup> Tras la contienda bélica, en el marco de un fuerte proceso inflacionario, el costo final subió a \$0.50 y con la mencionada quita de retenciones a \$1.10. Todo ello llevó a una fuerte puja entre asalariados y patronal, tanto industriales como cañeros, por la distribución de la renta tras el nuevo precio.

De todos modos, fue el propio gobierno, en la voz de Eva Perón, quien propuso en las negociaciones de 1949 un aumento del 18%.<sup>6</sup> Dicha cifra fue luego ratificada por la patronal e inmediatamente rechazada por los trabajadores. Como era costumbre, la negociación se realizaba sobre el final de la zafra, que cuando concluía quitaba en gran medida la capacidad de presión de

---

<sup>4</sup> *Resolución de FOTIA*, 11-10-49. Los documentos sindicales nombrados en el trabajo se encuentran en el archivo del PC y se hallaban inexplorados hasta aquí, al menos por las investigaciones académicas.

<sup>5</sup> Pucci, Roberto, *Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966*, Buenos Aires, Ediciones del pago chico, 2007, pp. 41-2.

<sup>6</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 05/10/1949.

los obreros debido a la característica estacionaria de la actividad. Frente al rechazo de las demandas de la FOTIA, y tras varios días de negociación, la organización gremial declaró la huelga en Tucumán el 14 de octubre de 1949. El conflicto se nacionalizó pocos días después, al conocerse la decisión en las filiales de la Federación en las demás provincias.

Automáticamente, el gobierno se negó a continuar las negociaciones hasta que no cesara la medida, apartando del conflicto al sector empresarial. En los días siguientes, tras la negativa a levantar la huelga, la misma fue declarada ilegal, las sedes sindicales fueron clausuradas y se enviaron interventores de la CGT desde la Capital Federal. El pedido de estos últimos, quienes según manifestaron eran enviados por el propio Perón, era levantar el paro y confiar en la solución que daría el presidente luego de que aquello sucediese. La huelga de 1948 había terminado de manera similar, pero la dirigencia gremial azucarera y sobre todo las bases, no accedieron esta vez.

Los huelguistas debieron soportar entonces una fuerte embestida. Se comenzó por un ataque mediático liderado por los diarios oficialistas, particularmente *La Época* y *Noticias Gráficas*, acompañado por panfletos en contra de la huelga arrojados por aviones sobre las casas de los trabajadores, y por fuertes declaraciones públicas de los interventores cegetistas. Además el gobierno ordenó a las administraciones de los ingenios que hiciesen sonar la sirena de entrada de las fábricas como sucedía en condiciones normales, lo cual fue saludado por estos. Luego se intentó fracturar el movimiento buscando dividir a los sindicalistas de las diferentes filiales, y a sus obreros en forma individual, militarizando las fábricas con la gendarmería y la policía para asegurar la “libertad de trabajo”. Esta estrategia tuvo poco éxito, salvo en el ingenio *La Esperanza*, en manos del Estado provincial gestionado a través del OFEMPE (Organismo Financiado de Empresas Mixtas Privado Estatal). El 15 de noviembre tras varios intentos fallidos el sindicato de este ingenio cedió a la presión de su administración, formada por funcionarios públicos, y levantó la huelga. Pero fue el único caso.

Frustrados los intentos anteriores, el gobernador Carlos Domínguez viajó a Buenos Aires y a su retorno reunió al bloque de legisladores oficialistas, quienes se involucraron activamente en el conflicto, atacando a la huelga. Publicaron un comunicado contra la medida de fuerza pero su tarea fundamental consistió en enviar a los legisladores, muchos de ellos ex obreros y ex azucareros, a sus territorios, para disputar allí contra los huelguistas. Aunque no lograron su cometido, contribuyeron a desgastar y dividir a los asalariados.<sup>7</sup>

Finalmente las autoridades apelaron a la represión directa para darle el golpe de gracia al conflicto. Medio centenar de gremialistas azucareros fueron detenidos en la comisaría que funcionaba en el subsuelo de la Casa de Gobierno, junto a otros sindicalistas y activistas políticos entre los que se encontraba Antonio Aguirre. A su vez, la policía impidió algunos pocos intentos de crear comisiones directivas provisorias ante el descabezamiento de las existentes.<sup>8</sup>

Con el fin de la huelga, Perón comunicó que anunciaría personalmente la solución dada al conflicto, a la vez que una explicación sobre el mismo. El mensaje fue leído por el presidente desde Buenos Aires y transmitido a todo el país por cadena nacional, el 2 de diciembre. Allí anunció que se aumentaría un 60% del total de la masa salarial, con retroactividad al 1 de julio, lo cual era uno de los pedidos más fervientes, y que la redistribución de dicho incremento sería discutida posteriormente por una comisión paritaria. La comisión fue nombrada por la intervención de la FOTIA promediando diciembre, resolviendo dar de mejora un monto fijo de \$5.61 por jornada a todos los trabajadores. De tal modo el salario mínimo aumentó casi un 65%, pasando de \$8.64 a \$ 14.25, mientras el máximo se incrementó en un 32.24% ascendiendo de \$17.40 a \$23.01. Se evidenciaba así que la suba representaba una recomposición salarial, al priorizar el ascenso del piso antes que el escalafón.

No menos importante fue el origen de aquel 60%. Un 25% sería aportado por la patronal, ya fuesen ingenios o cañeros, y el 35% restante por el Estado. Del 18% ofrecido por los primeros

---

<sup>7</sup> *La Prensa*, Buenos Aires, 19/11/1949.

<sup>8</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 15 y 16/11/1949.

durante la negociación, situación que hace suponer que estaban dispuestos a conceder unos puntos más, la diferencia de 7% no parece sustancial. El brazo que logró torcer la lucha azucarera fue el del gobierno. En el contexto de crisis económica que se vivía, el objetivo era eliminar las compensaciones tras autorizar una suba del precio, pero debieron volver sobre sus pasos.

### **El contexto de represión: la huelga de los municipales y el sindicato paralelo de gastronómicos**

Días antes de que comenzase la huelga azucarera, el 11 de octubre del '49 se iniciaba una huelga de los obreros municipales de la capital provincial, junto con los trabajadores del principal matadero de la ciudad que pertenecía a la comuna, también por reclamos salariales. La disputa se extendió hacia otros sindicatos, quienes crearon una comisión intergremial y decretaron una huelga general, por solidaridad, que se llevó a cabo desde el 31 de ese mes hasta el 2 de noviembre, pese a la fuerte oposición del gobierno y de la CGT local y nacional. Este conflicto no tuvo vinculación directa con el azucarero, aunque para el gobierno representó mantener por un tiempo dos frentes abiertos al mismo tiempo.<sup>9</sup>

Los interventores enviados por la CGT para tratar la huelga de la FOTIA encararon también las discusiones con los municipales, y las estrategias utilizadas por el gobierno fueron análogas. Mientras se negociaba con la intergremial que dirigía la huelga general, muchos de sus miembros fueron detenidos en el subsuelo de la Casa de Gobierno, donde funcionaba la estación central de la policía, aunque siguieron siendo considerados por las autoridades como interlocutores mientras se los mantenía presos e incomunicados.

Un hecho sumamente grave ocurrido en el curso del conflicto fue el asesinato del obrero Dardo Trassi, un chofer que se encontraba de paro junto a su sindicato. Trassi apedreó un colectivo como parte de las medidas de boicot usadas contra los rompe-huelga que intentaban hacer funcionar algunos servicios. La unidad estaba custodiada por un agente policial que bajó de la misma, lo persiguió y lo acribilló. En un contexto de gran represión y encarcelamientos, su asesinato despertó una profunda ira entre los huelguistas, agudizada por la tentativa oficial de presentar el hecho como un crimen por venganza personal ajeno al tema obrero.<sup>10</sup>

La solución del conflicto de los municipales también guarda similitudes con lo que ocurriría días después con los azucareros. Las demandas fueron mayormente atendidas, pero dejando como consecuencia la intervención de la CGT local, y la intromisión de la misma en el seno de los sindicatos más combativos.

Esta injerencia de la CGT y el gobierno sobre los sindicatos con el afán de buscar direcciones sindicales más adictas, incluso entre diferentes sectores del peronismo, fue una práctica permanente durante el régimen instaurado con el golpe de Estado de 1943. Esto se aplicó no solo mediante las intervenciones, sino también con el apoyo hacia algún grupo sobre otro en cada gremio o con la creación de sindicatos paralelos. Esta última metodología fue la usada hacia fines de 1949 para atacar a la Unión de Mozos y Anexos de Tucumán, a la cual pertenecía Antonio Aguirre.

Hacia 1949, el sindicato de mozos de Tucumán aún mantenía un importante grado de independencia respecto al gobierno y no estaba afiliado a la CGT, lo que significaba una excepción respecto a la mayoría de los gremios locales. Si bien su dirección simpatizaba con el peronismo, contaba en su seno con dirigentes y afiliados opositores, como el propio Aguirre. En octubre de aquel año comenzó una campaña para debilitar esta organización.

---

<sup>9</sup> Son varias y complejas las razones por las que los azucareros no confluían en los conflictos del resto de los sindicatos de la provincia principalmente radicados en la capital, ni viceversa, pese a darse muchas veces en simultáneo. Desarrollar dichas causas excede los objetivos del presente trabajo, aunque puede destacarse sintéticamente que las mismas incluían el aislamiento geo-político de los pueblos de ingenio con respecto a la capital tucumana así como la disputa de ambos sectores por liderar la rama sindical y política del peronismo. De todos modos, esa falta de solidaridad no dejaba de ser un objetivo buscado por las autoridades, en su afán de mantener el orden social.

<sup>10</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 2/11/1949.

El 9 de octubre de 1949 el pequeño Sindicato de Camareras y Anexos cambiaba su denominación por el de Sindicato de Obreros Gastronómicos y Anexos y se afiliaba a la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH), a su vez adherida a la CGT. Su idea era combatir a la vieja organización de los mozos y, al contar con el apoyo del gobierno de la provincia, disponía de un arma muy importante: este último designaba numeroso personal temporario en los bares de los establecimientos concesionados por el Estado provincial. Los mozos eran beneficiarios de dichos cargos a través de su bolsa de trabajo, la que casualmente estaba a cargo de Aguirre dentro del gremio. Esto comenzó a ser disputado por el nuevo organismo paralelo con el apoyo de la provincia, con el propósito de ganarse nuevos afiliados mediante tales designaciones. El nuevo sindicato de gastronómicos, además, boicoteó la huelga general llamada por los municipales así como la que se convocó, luego en diciembre, en reclamo por el asesinato de Aguirre.

La política represiva del gobierno contra sectores del movimiento obrero inaugurada desde los comienzos del golpe de 1943, aumentó y se generalizó con los primeros síntomas de agotamiento de la política económica hacia 1949. Al tratar la huelga azucarera, el editorial del periódico socialista *La Lucha* alertaba sobre el hecho de que se estaba gestando la unión entre la policía – que recientemente había logrado un aumento de sus salarios tras un conflicto–, la CGT, la Secretaría de Trabajo y Previsión y los gobiernos provinciales y nacionales, para fortalecer la política de persecución y represión contra los nuevos conflictos causados por la crisis del modelo. La nota central de esta edición era acompañada por una caricatura que sintetizaba el accionar del gobierno y la CGT frente las huelgas obreras.<sup>11</sup> Estas prácticas se habían sistematizado, pero tanto para los contemporáneos como para la historiografía posterior, el caso de la FOTIA fue paradigmático de la profundización de esta metodología represiva.



Viñeta editada en el periódico *La Lucha*, Buenos Aires, 8/11/1949.

### La violencia contra la huelga azucarera

La represión directa contra la huelga azucarera comenzó en Jujuy, el segundo centro en importancia de esta industria a nivel nacional. Allí, la persecución y encarcelamiento de dirigentes políticos y obreros se mezcló con una disputa partidaria dentro del peronismo que había producido una escisión, la Concertación Obrera Cuatro de Junio, finalmente vetada para

<sup>11</sup> *La Lucha*, Buenos Aires, 8/11/1949.

participar en las elecciones. De todos modos, existieron otras causas que ayudan a explicar por qué las detenciones comenzaron allí casi un mes antes que en Tucumán. En primer lugar, el poder e importancia de los principales dirigentes de la FOTIA era naturalmente menor en Jujuy. Pero no menos importante era el conflicto que se desarrollaba entre los municipales de la capital tucumana, devenido en huelga general. Naturalmente, no era conveniente pensar en apresar a los azucareros cuando se tenía detenido a un gran número de sindicalistas capitalinos y se negociaba con ellos el fin del conflicto de los trabajadores comunales.

El 28 de diciembre, el Comité de Huelga de la FOTIA denunciaba atropellos policiales en Jujuy, entre los que se incluían la detención del presidente del sindicato del ingenio La Merced, Pedro Rodríguez, y ataques contra el secretario del sindicato de La Esperanza, Roque González Cleros.<sup>12</sup> La edición de *La Gaceta* de ese mismo día, comunicaba que se había apresado al asesor legal de FOTIA en dicha provincia y candidato a gobernador por la Concertación Obrera Cuatro de Junio, Dr. Manuel Gregorio Colina, al apoderado de ese partido, José Rosalío Lozano, y al diputado provincial por Ledesma Oscar Mamerto Medina, rápidamente liberado, entre otros varios obreros y empleados.<sup>13</sup>

Días después comenzaba una nueva embestida en esa provincia: el 9 de noviembre era detenido el reconocido dirigente Esteban Rey, luego signado por Perón como agitador. El día 11 la provincia pedía el auxilio de la gendarmería para controlar algunos ingenios. Y a partir del día 16 de ese mes se produjeron numerosas detenciones, en algunos casos con posteriores denuncias de mal trato. Para el 21, día en que comenzaron los encarcelamientos obreros en Tucumán, los trabajadores del ingenio La Mendieta denunciaban que 80 asalariadas se encontraban en prisión, además de los presos varones. El 14 de noviembre, un delegado del ingenio La Esperanza de Jujuy anunciaba que en la disputa intergremial había muerto uno de los obreros adheridos a la FOTIA de apellido Quinteros.<sup>14</sup>

En tanto, como mencionamos, las detenciones en Tucumán comenzaron hacia la segunda quincena de noviembre. Pero no fue un trabajador el primero en ser apresado. Paradójicamente, el 19 de noviembre era detenido el presidente del CAR (Centro Azucarero Regional), que nucleaba a los empresarios del sector: José María Paz. En un hecho confuso, Paz discutió con unos agentes que le reclamaban no haber tocado la sirena de su ingenio, el Concepción, en una “clara acción sabotadora”. El matutino oficialista *La Época* saludaba así la noticia: “...el hecho producido viene a evidenciar la ecuanimidad con que proceden las autoridades, que lo mismo detienen a un dirigente gremial cuando es considerado elemento perturbador, que a un encumbrado oligarca (...) La Revolución está nivelando a las clases sociales y eliminando los odiosos privilegios implantados por la oligarquía”.<sup>15</sup>

Es complejo analizar las causas reales de este hecho. Podría significar un intento por demostrar el poder del gobierno frente a todos los sectores, una acción demagógica para justificar la represión que recaería sobre los obreros, ambas razones o ninguna de las dos. Lo cierto es que el suceso, que mantuvo a Paz encerrado por dos días, no trajo mayores consecuencias. Salvo, una reacción de agitación y repudio entre los sectores altos de la provincia que abarcaba desde los miembros del centro que aquel presidía, hasta la máxima autoridad eclesiástica local, Monseñor Juan Carlos Aramburu.

Entre el 21 y el 24 de noviembre se apresaron en Tucumán alrededor de 50 obreros azucareros, además de otros sindicalistas y activistas acusados de querer organizar una huelga general. El

---

<sup>12</sup> Comunicado del Comité de Huelga, 28/11/1949. En Jujuy funcionaba el ingenio La Esperanza, homónimo al tucumano pero sin ninguna vinculación. Este establecimiento sufrió durante la huelga particulares disputas intergremiales pues al comenzar el conflicto, se dio lugar en la STP nacional al pedido de un grupo de obreros de dar personería gremial a un sindicato “libre”, que comenzó a coexistir con el adherido a la FOTIA. El primero no participó de la huelga confrontando con el segundo. Al finalizar el paro, 60 obreros huelguistas fueron despedidos, según la administración por pedido del nuevo sindicato. *La Gaceta*, Tucumán, 7/12/1949.

<sup>13</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 28/11/1949.

<sup>14</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21/11/1949.

<sup>15</sup> *La Época*, Buenos Aires, 20/11/1949.



contingente de detenidos incluía a la gran mayoría de los dirigentes de la lucha. Días después, concluida la huelga, comenzaba la *razzia* contra todos los acusados por Perón en su discurso, cuya lista negra se agrandó tras la difusión de un panfleto titulado “La Traición. De los dirigentes de la FOTIA y la FEIA a los trabajadores del azúcar”. En total figuraban 132 acusados, 95 de los cuales eran trabajadores del azúcar, mayormente con cargos sindicales, y el resto de otros gremios, asesores letrados o estudiantes y militantes signados como agitadores. Aguirre figuraba como “agitador” dentro de la enumeración de los “traidores”.

Ni antes ni después de conformada esta lista los damnificados tuvieron derecho a defenderse en los sindicatos ni en el Partido Peronista, de donde fueron expulsados quienes eran afiliados. Muchos de estos decidieron replicar las impugnaciones a través de la prensa, en la mayoría de los casos relatando su trayectoria política dentro del peronismo o en el apartidismo, y negando vinculaciones con el PC.

### **Las torturas y la desaparición de Aguirre**

El 27 de noviembre, en paralelo a la detención de numerosos dirigentes azucareros, se encarcelaba a 8 gremialistas de la capital provincial, acusados de ser militantes comunistas y agitadores de una huelga general en apoyo a la FOTIA. Según un informe de la policía, habían sido descubiertos reunidos en un domicilio en las afueras de la ciudad, mientras planificaban el paro total, junto a material de propaganda que llamaba a dicha huelga.<sup>16</sup> Durante la madrugada del día 28 fueron sacados de su domicilio otros activistas, entre los que se encontraban Aguirre y Fernando Llombart, ambos mozos. La policía carecía de orden judicial, por lo que estos encarcelamientos caían en la categoría de secuestros.<sup>17</sup>

Carlos Antonio Aguirre no ocupaba un cargo destacado en su sindicato, pero al parecer cumplía una importante función en la huelga. Samuel Kaufman, quien era activista y militante del PC en ese entonces, lo describe de esta manera: “Ya [en noviembre del ’49] había una relación entre los sindicatos de la capital [provincial] y la FOTIA. Y presuntamente se había designado como delegado de relaciones entre ellos a Carlos Antonio Aguirre, que era dirigente sindical gastronómico y afiliado comunista. Pero ahí el tema partidario político estaba afuera de toda cuestión, no se discutía, se discutían los temas específicamente gremiales.”<sup>18</sup>

Tras el levantamiento de la huelga azucarera, el mismo 28, comenzaron a liberarse a los detenidos. Los acusados por comunistas y agitadores de la huelga general, fueron los últimos en ser excarcelados. Pero cuando salieron todos de prisión, Francisca Grau, esposa de Aguirre, denunció que este no había sido soltado y que la policía rechazaba su habeas corpus negando haberlo apresado. Así comenzaba la búsqueda por el paradero de aquel mozo desaparecido.

El grupo de apresados en el que se encontraba Aguirre había sufrido un tratamiento diferente por parte de la policía. Los obreros y dirigentes azucareros detenidos, que eran la mayoría, no denunciaron malos tratos de la fuerza pública. Estos casi en su totalidad se manifestaban como peronistas, o al menos sindicalistas puros que simpatizaban con el gobierno, más allá que muchos de ellos serán luego acusados como traidores por el presidente y echados de sus sindicatos y del partido. En cambio, al menos cuatro de los signados por intentar extender la huelga hacia los gremios de la capital denunciaron haber sido torturados: el mozo Llombart, José Rodolfo Molina de gráficos, Manuel Arroyo militante del Partido Socialista (PS) y miembro de la Unión Musical y Aguirre, según consta en la investigación de su asesinato. Estos fueron además acusados por comunistas.

La defensa de Grau, esposa de Aguirre, fue asumida por Celestino Gelsi. Gelsi, futuro gobernador de la provincia en 1958, era una figura del radicalismo local que representaba

---

<sup>16</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 28/11/1949 y *La Prensa*, Buenos Aires, 28/11/1949.

<sup>17</sup> Toda la información de los hechos puntuales sobre el caso Aguirre fueron recabados de la prensa comercial y partidaria enunciada en la bibliografía y de Arnedo Álvarez, Gerónimo, *Un clamor de justicia en los ingenios*, Buenos Aires, Anteo, 1950. En adelante sólo se especificará la cita al respecto cuando sea literal.

<sup>18</sup> Entrevista Samuel Kaufman, 21/10/2014.

entonces a víctimas de abusos y violencia ejercida por el gobierno. Ambos lograron que la policía les permitiera visitar los calabozos de la comisaría principal de la provincia, ubicada en el subsuelo de la Casa de Gobierno. Aunque no dieron con el paradero del mozo desaparecido, las autoridades rápidamente debieron modificar la primera versión oficial de que Aguirre no había sido detenido, por la de que había estado solo durante 20 minutos, siendo liberado por no ser dirigente ni tener poder de decisión respecto al llamado a huelga que se buscaba evitar. De todos modos, su encarcelamiento no figuraba en el libro de ingresos de la comisaría, lo que dio sustento para aquella primera versión oficial, aunque al ratificarse que estuvo encarcelado se confirmaba en realidad que había sido víctima de un secuestro ilegal por parte de la policía.

El testimonio de Llombart desbarató aquella treta.<sup>19</sup> Este declaró que mientras él mismo era torturado, vio entrar a Aguirre a un cuarto contiguo, oyó lamentaciones de aquel y finalmente un golpe que interpretaba como el de un cuerpo desplomándose, mientras un policía decía: “se ha desmayado el muy flojo”. A ello se sumó la información que logró conseguir Grau, sobre un llamado desde la Casa de Gobierno a la asistencia pública en un horario similar al que Llombart decía haber sentido el desvanecimiento de Aguirre. En el registro de la institución sanitaria figuraba un llamado de ambulancia a las 4:10 am, la misma salió 2 minutos después y retornó a los 40 minutos. El enfermero en su informe notificó que el auxilio “fue innecesario”, dejando así ambiguo en un primer momento el esclarecimiento de los hechos.

Ignorando las pruebas y en una clara maniobra de distracción, el ejecutivo provincial comenzó a trabajar sobre la hipótesis de que la desaparición de Aguirre se debía a un autosequestro coordinado por el PC. Acusaron al mozo de escaparse con dinero del sindicato, mientras allanaron domicilios de varios miembros del partido e incluso la sede del mismo en la provincia, con el pretexto de buscar información sobre el caso.<sup>20</sup>

En contraposición a las persecuciones gubernamentales, el Sindicato de Mozos desmintió las versiones de la policía y del gobierno, responsabilizándolos por el paradero de su colega desaparecido. Las posturas de las direcciones sindicales de la provincia se dividieron, algunas cuestionaron la conducta del poder ejecutivo y otras asumieron su defensa y responsabilizaron al comunismo por todos los acontecimientos, incluida la desaparición de Aguirre. El gremialismo más adicto al gobierno se aglutinó en la intervenida filial local de la CGT, cuya postura fue dejar que la investigación siguiera su curso institucional. Los demás sindicatos intentaron organizar una campaña a favor del esclarecimiento del caso, desconfiando del desarrollo que este venía teniendo. Más allá de la mayoritaria identificación del gremialismo con el oficialismo gobernante, puede verse la heterogeneidad que aun imperaba en el movimiento obrero local, e incluso en el seno de cada organización.

Un ejemplo de esto último fue lo sucedido en la Unión Musical Tucumana. Manuel Arroyo era prosecretario de la comisión directiva de ese sindicato, del cual decidió alejarse por el silencio que mantuvo el gremio durante varios días ante sus denuncias como víctima de torturas. En la respuesta de las autoridades de la Unión, tras las presiones por su prescindencia, se sostenía:

“... en cuanto a nuestro silencio en su situación de que fuera protagonista en los sucesos del 28 de noviembre pasado y que son del dominio público, la Unión Musical, teniendo en cuenta que el señor Arroyo no llevó en ninguna oportunidad, representación ni mandato, ha creído conveniente no por cobardía, sino por establecerlo sus estatutos, no inmiscuirse en ese episodio, ya que el afectado actúa en el Partido Socialista, por lo que cabe preguntar: ¿en qué carácter actuó en esos episodios?”. Sobre el final del escrito se aclaraba: “como hombres de bien, repudiamos en toda su magnitud, suceso tan triste, repudio que hemos silenciado por las razones antes anotadas...”<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> El testimonio está reseñado en *La Gaceta*, Tucumán, 01/12/1949.

<sup>20</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 02/12/1949.

<sup>21</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 13/12/1949.

Esta posición de la CD implicaba la justificación de la represión cuando esta se ejercía contra militantes de la oposición al gobierno, lo que provocó el alejamiento de 4 miembros más de dicha comisión.

El peronismo impuso la idea dentro del movimiento obrero, de que toda participación o incluso declaración de los partidos opositores politizaba la lucha gremial con fines desestabilizadores. Había logrado a tal punto instaurar dicha concepción que los propios partidos opositores se autocensuraban. Tal fue el caso del PS, que solo varios días después de las denuncias de su afiliado Arroyo, hizo declaraciones públicas pidiendo el esclarecimiento del caso. Así explicaba su demora: “Nuestro partido no quiso hasta el presente, hacer su pública protesta por estos hechos, ni reclamó el castigo de los verdaderos responsables, a fin de que no se interprete su actitud como mera especulación política y en esperanza, también, de que la justicia de instrucción adoptaría las medidas urgentes que el grave caso reclama...”<sup>22</sup> Es decir que, en este “caso testigo”, el sindicato se desentendía por considerar que su afiliado había sido reprimido en tanto miembro del partido, mientras que el partido no intervenía por temor a entorpecer la investigación al ser tildada su participación como boicot. Naturalmente esto no era aplicable para el Partido Peronista gobernante, lo cual se observa no solo en la abierta identificación de los sindicatos con el gobierno, sino en el vínculo del gremialismo con las organizaciones partidarias peronistas, como los Centros Políticos y Femeninos que mantuvieron un diálogo permanente con los huelguistas durante el conflicto azucarero.

En la división de posturas dentro del gremialismo local frente a la desaparición de Aguirre, *La Época* tomó rápidamente posición y acusó al Sindicato de Mozos y a los demás gremios aliados al mismo, de ser agitados por el PC. En su edición del 9 de diciembre afirmaba esa hipótesis y reproducía comunicados de la policía, del poder ejecutivo y del bloque peronista del legislativo provincial que sostenían idéntica postura. Los legisladores oficialistas, la mayoría provenientes del sector obrero y azucarero, que habían cumplido una tarea fundamental en el desgaste de la huelga azucarera, emitieron una declaración en la que aludían “...al plan descubierto por las autoridades y organizado por elementos comunistas, mediante el cual se trata de crear un nuevo estado de intranquilidad y agitación en la provincia”<sup>23</sup>.

Hubo, sin embargo, un legislador oficialista, el senador provincial Delfor Gallo, que se enfrentó a esta postura. Ya durante la huelga azucarera se había negado a firmar la nota del bloque pidiendo a los trabajadores que cesasen su medida de fuerza, junto a los diputados Justiniano Rivarola, quien era hermano del secretario general de la FOTIA Lorenzo Obdulio, y Manuel Osoros. Frente a la nueva situación, Gallo presentó una minuta en la cámara para que esta declarase que veía “con buenos ojos” que se separase de sus funciones a los agentes de la fuerza pública sospechados de estar vinculados con la desaparición de Aguirre, hasta tanto se aclarase la situación. Tales insubordinaciones le significaron la expulsión de la bancada junto con Rivarola, mientras Osoros fue indultado tras su pedido de disculpas.

Mientras tanto, el 10 de diciembre el juez encargado del caso de Aguirre, Marcelino Suñen, consideró que existían pruebas suficientes para encarcelar a los primeros policías involucrados en los hechos. Naturalmente, estos eran los de rango más bajo, contabilizando 12 en total, todos del Departamento de Investigaciones. Pero esto no detuvo la activa movilización sindical que bregaba por el esclarecimiento del caso. Por el contrario, según surge de sus diversas declaraciones, la actitud del juez fue interpretada como una consecuencia de la presión que venían ejerciendo. Dos días después de aquellas detenciones se formó una comisión intergremial dirigida por el Sindicato de Mozos, que amenazó con una huelga general.<sup>24</sup> La intervención local

---

<sup>22</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 13/12/1949.

<sup>23</sup> *La Época*, Buenos Aires, 09/12/1949.

<sup>24</sup> Los gremios que integraron la comisión fueron: Sindicato Unión Obreros Cerveceros, Asociación de Empleados de la Cervecería Norte, Sociedad de Obreros y Empleados de Tintorerías, Sindicatos de la Construcción, Sociedad de Obreros del Automóvil, Sindicato de Obreros Fosforeros, Sindicato de Obreros Ladrilleros de Alto de La Pólvara,

de la CGT junto a sus sindicatos más adictos, en cambio, continuaron proponiendo dejar que la justicia actuase sin movilizarse gremialmente en ningún sentido.

Con el paso de los días la tensión y el descontento crecieron en varios sectores de la sociedad. El juez siguió con nuevas detenciones a agentes incluyendo ahora, además de policías, a miembros de gendarmería. El 13 de diciembre uno de aquellos, el oficial Gerónimo Moreno intentó escapar de tribunales, en donde estaba detenido, saliendo hacia la calle para buscar mezclarse entre los transeúntes. Al ser nuevamente atrapado tuvo un ataque de nervios, según trascendió a la prensa, y confesó datos que fueron fundamentales para hallar el paradero del mozo desaparecido. El diario *La Gaceta* reseñaba que al día siguiente de este hecho la ciudad había amanecido con varias pintadas que se preguntaban “¿Dónde está Aguirre?”.<sup>25</sup>

### **La aparición del cuerpo de Aguirre y el desenlace de los hechos**

Siguiendo la pista dada por el oficial arrepentido, el 15 de diciembre se encontraba un cuerpo sin vida en Río Hondo, Santiago del Estero. Poco después se confirmó que era el de Antonio Aguirre. Inmediatamente la comisión intergremial creada para el esclarecimiento del caso comenzó a organizar por un lado el velorio y entierro del mozo asesinado, y por el otro una huelga general en repudio de lo sucedido. Ambas actividades se llevarían a cabo en los días siguientes, como relataremos más adelante, pero con una fuerte resistencia de las autoridades y la CGT local.

También hubo algunos debates al interior de la intergremial en la primera reunión tras conocer la noticia de que se había hallado el cadáver de Aguirre, el mismo 15 de diciembre. Tres entidades motorizadas por el PC, aunque no compuestas solo por aquel partido, enviaron notas de adhesión a la comisión intergremial: el Comité Pro Paz, la Liga de los Derechos del Hombre y el Movimiento de Democratización Sindical. Según relataba *La Gaceta* el presidente del sindicato de cerveceros, Gregorio Moreno mocionó que

“...cumpliendo un mandato conferido en el sentido de ajustar la labor de la comisión al terreno netamente gremial [y considerando que] dichas agrupaciones persiguen finalidades políticas (...) querían no despertar susceptibilidades ni malas interpretaciones (...) [Por lo que proponía] que se facultara a la comisión a dar un comunicado señalando que solamente se aceptará las manifestaciones de solidaridad provenientes de organizaciones gremiales, y que las demás entidades de otro carácter podían hacer públicas sus adhesiones por medio de la prensa para conocimiento de la clase trabajadora”.

En tanto Juan Acuña, delegado por los panaderos, consideró “... la necesidad de contemplar las adhesiones desde un punto de vista humanitario”, proponiendo aceptar las mismas.

Según el diario local otros dirigentes intervinieron apoyando esta última moción, pero a la hora de someter el tema a votación ganó la postura de Moreno “por amplia mayoría”. Aunque no era una posición unánime, volvía a imponerse la autoproscrición de establecer cualquier diálogo con partidos o entidades vinculadas con la oposición. En la misma reunión Acuña reclamó la extrema diplomacia con la que estaba actuando la intergremial. Moreno refutó explicando que había mucha apatía de varios gremios, y que la comisión estaba obrando con “criterio realista”, lo cual denotaba el éxito de la campaña gubernamental para desviar la atención de los sindicatos respecto al reciente homicidio.<sup>26</sup>

El 18 de diciembre se produjo el velorio y entierro del obrero asesinado. El sindicato de Mozos pretendía hacer la ceremonia en su local, pero las autoridades lo impidieron por lo que debió hacerse en el domicilio de la víctima. Cuando salió la caravana hacía el cementerio, algunos dirigentes decidieron desviarla y pasar por la sede del sindicato. En el camino la columna desfiló

---

Sindicato de Obreros Pasteleros, Sindicato de Conductores de Coches de Plaza y Cámara Sindical de Cocineros y Anexos. Además envió un delegado el Sindicato de Mozos de Catamarca.

<sup>25</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 15/12/1949.

<sup>26</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 16/12/1949.

por la puerta del Escuadrón de Seguridad y algunos repudiaron al mismo. En un primer momento la policía no se había hecho presente, pero frente a estas situaciones apareció. El clima comenzó a caldearse aún más cuando varios de los presentes barajaron la posibilidad de pasar por la Casa de Gobierno. Finalmente se desistió por la intermediación de Gelsi, abogado de la viuda, y del propio juez de la causa Suñen, quien encabezó la pompa fúnebre, que lograron finalmente que el cuerpo fuese enterrado sin mayores altercados.

A su vez, la comisión intergremial anunció un paro general en repudio de lo sucedido para el 20 de diciembre. Inmediatamente la CGT local, junto a los gremios más adictos a la misma, alguno de ellos también intervenidos, anunció su rechazo y boicot a la medida de fuerza decretada. Considerándola político-electoralista, estos volvieron a usar la estrategia de arrojar panfletos desde un avión pidiendo a los trabajadores que no se adhieran a la misma. Naturalmente, la huelga fue declarada ilegal. Hubo además nuevas detenciones y altercados menores.

La mayoría de los principales y más numerosos gremios de la ciudad paralizaron sus actividades en la fecha pactada, e incluso hubo adhesiones parciales y totales a la huelga en otras provincias. Se sumaron a la medida mozos, tranviarios, municipales de la capital, chóferes, obreros cerveceros y empleados de la Cervecería Norte, obreros del dulce, metalúrgicos, artes gráficas (La Gaceta por ejemplo, no tuvo edición ese día), ladrilleros de Alto la Pólvora, construcción, obreros de la carne, fideeros, cerámicos y ladrilleros de Villa Luján, papeleros, obreros del automóvil y tintoreros. Panaderos se plegó en forma parcial, pues su gremio estaba dividido tras los recientes sucesos, y bodegueros se sumó pese a la desautorización del interventor impuesto pocos días antes. Además se plegaron trabajadores de algunos ingenios como La Florida y Santa Lucía con cese de actividades parciales, al margen de sus sindicatos conducidos tras la Gran Huelga por directivos nombrados por los cegetistas. Quienes no se adhirieron fueron la FOTIA, los empleados de comercio, madera y telefónicos, entre los más importantes.

Tras el paro la CGT continuó criticando toda acción de denuncia referida a Aguirre y, esta vez desde su sede central en Capital Federal, dio un comunicado considerando que era el comunismo quien agitaba estos movimientos. En el mismo se sostenía, entre otras cosas que, “Querer lucrar con el crimen es tanto más odioso que el crimen mismo...”.<sup>27</sup> El Sindicato Unión Chóferes y Anexos, que se había plegado a la medida de fuerza, respondió a la central en una carta a La Gaceta, que este medio relataba de la siguiente manera:

“Señalan que una asamblea del 8 de octubre de 1948 [el sindicato de choferes] expulsó a los afiliados que profesasen ideas comunistas, ya fueran afiliados a ese partido o actuaran encubiertamente, ratificándose esa resolución en una asamblea que trató el pedido de reconsideración de los afectados. (...) terminan aclarando que su adhesión al paro obedeció a su solidaridad con el duelo de un obrero cuya ideología desconocían, participando solamente de un acto humanitario incuestionable.”<sup>28</sup>

Resulta interesante observar la postura tomada por el diario oficialista La Época a esta altura de los hechos. Durante los conflictos obreros del '49, el diario había sostenido las posiciones del ejecutivo nacional y de la línea cegetista, siendo un vocero de las mismas. Incluso adelantó algunas situaciones antes que estas se produjeran, como por ejemplo cuando anunciaron la posible declaración de ilegalidad de la huelga azucarera o la intervención de la FOTIA, hechos que ocurrieron poco después. Respecto al gobierno provincial, en pleno conflicto el diario publicaba el 20 de noviembre una nota apologética de la gestión del gobernador Domínguez, bajo el título “Intensifican en Tucumán la realización de las obras públicas que fueron previstas en el programa del gobierno de la revolución”. El artículo iba acompañado de una foto del mandatario, en claro apoyo a su gestión, lo que en el contexto implicaba también un apoyo a su posición frente a la lucha azucarera.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 22/12/1949.

<sup>28</sup> *La Gaceta*, Tucumán, 24/12/1949.

<sup>29</sup> *La Época*, Buenos Aires, 20/11/1949.

Pero tras el cuestionamiento generalizado por los sucesos del asesinato de Aguirre, La *Época* tomaba distancia del ejecutivo provincial y lo cuestionaba. El 18 de diciembre titulaba “Inexplicable actitud del gobernador de Tucumán”. En el cuerpo de la nota impugnaba la inercia del mismo tanto por la inexistencia de declaraciones públicas de su parte sobre el caso Aguirre, como en su inercia al no separar de sus cargos a los policías sospechados de estar implicados en el asesinato del mozo. Las impugnaciones eran ciertas, pero lo cuestionable era la estrategia del diario por aislar y ubicar como único responsable al gobernador local. La hipótesis que sostenía este medio de prensa era que, la muerte del obrero había sido causada por un exceso impugnable a agentes puntuales de la fuerza pública, sin vínculo con el marco de represión de los trabajadores organizados.

Ante esto, según el mismo medio, el ejecutivo nacional y la CGT, como así también los legisladores provinciales oficialistas y el propio juez de la causa venían bregando por esclarecer lo sucedido. La “extraña” excepción era Domínguez. Por eso, relataba este diario, el Ministro del Interior le envió un telegrama donde se expresaban “los deseos” del presidente, buscando “darle un aldabonazo al gobernador”.<sup>30</sup> Sin duda toda la crisis de los últimos meses en la provincia, agudizada tras la muerte de Aguirre, quitó respaldo desde la Casa Rosada hacia el mandatario provincial, buscando también así sacarse responsabilidades de lo sucedido, en tanto el mencionado diario reflejaba tal situación.

El 23 de diciembre, pocos días después de hallado el cuerpo de Aguirre, llegaba a la provincia la famosa Comisión Bicameral, también conocida como Comisión Visca en referencia a su presidente, el Diputado Nacional José Emilio Visca. Aunque la misma se había creado para investigar las denuncias de torturas contra opositores, es sabido que su tarea giró en torno a perseguir a medios periodísticos y otras instituciones no alineadas con el régimen. Por lo tanto, naturalmente, durante su gestión en Tucumán no se dedicaron a conocer sobre los recientes casos de torturas a obreros. En cambio allanaron el diario La Gaceta, el Jockey Club, el Colegio de Abogados y el PC, al que también clausuraron sumando otro golpe a los que venía recibiendo este partido. Cuando estuvieron en el Colegio de Abogados, Gelsi allí presente se quejó porque entre los agentes de la fuerza pública que acompañaban a la Comisión se encontraba el subjefe de policía Alfredo Martínez, en cuyo despacho se habrían producido la tortura y muerte de Aguirre. Además, la esposa del mozo había acusado a Martínez de ser el principal responsable del asesinato. Los miembros de la comisión argumentaron no conocer tal situación. En cambio interrogaron a los representantes del Colegio acerca de su actuación 4 años antes, inquiriéndolos sobre si estos habían pedido el paso del Poder Ejecutivo Nacional a la corte suprema y si habían apoyado, luego, a la Unión Democrática.<sup>31</sup>

En cuanto a las penas por el asesinato de Aguirre, en marzo de 1950 todos los detenidos fueron dejados libres bajo fianza, y el veredicto del juicio un año y medio después condenó con penas de dos y tres años con prisión en suspenso a los responsables del crimen, dejándolos en libertad.<sup>32</sup>

## Conclusión

Como es evidente, el título de este trabajo hace alusión a la reconocida investigación de Rodolfo Walsh, “¿Quién mató a Rosendo?”, la cual analiza la violencia inter sindical en los años '60.<sup>33</sup> Naturalmente no se pretende con ello asemejar aquel trabajo con este, ni un crimen con el otro. Pero sí existe un punto en común entre ambos sucesos: el uso de la violencia, particularmente en este caso contra el movimiento obrero, como una práctica determinante en la búsqueda de poder entre los trabajadores organizados.

Hasta 1943 la represión, persecución y expulsión del seno de las organizaciones gremiales de ciertos sectores de militantes no era una medida inédita para el Estado, quien acosaba y

---

<sup>30</sup> *La Época*, Buenos Aires, 18/12/1949

<sup>31</sup> *La Prensa*, Buenos Aires, 24/12/1949.

<sup>32</sup> *La Prensa*, Buenos Aires, 29/03/1950 y *La Nación*, Buenos Aires, 19/12/1951

<sup>33</sup> Walsh, Rodolfo, *¿Quién mató a Rosendo?*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2010.

encarcelaba, ni para los sindicatos, que realizaban purgas internas cuando las diferencias en su seno se agudizaban. Lo verdaderamente nuevo desde aquella fecha fue que estos actores lo hicieran en conjunto, lo cual se mantuvo a lo largo del peronismo. Este accionar tuvo un pico en Tucumán, en 1949, que implicó la intervención de la FOTIA y todas sus filiales, la CGT y varios otros gremios. Pero la represión contra la Gran Huelga Azucarera de aquel año, no es interpretada aquí como un cambio de la política gubernamental, sino como la profundización y agudización de la misma.

La historiadora tucumana Florencia Gutiérrez, siguiendo la línea marcada por Louise Doyon, afirma:

“Más allá de las disidencias provocadas por el proceso de normalización [de la FOTIA], a partir de 1950 asistimos a un marcado descenso de la conflictividad obrera (...) Distintas variables coadyuvan a explicar esta situación, que se repitió en diversas ramas productivas de la economía nacional. No se puede obviar ‘que el mundo del trabajo había atravesado un período de rápidos cambios, durante el cual vio realizada una gran parte de sus demandas prioritarias’. Por lo tanto, la disminución de la capacidad de los trabajadores de articular reclamos, más bien debe contemplar la gravitación que las experiencias de reivindicación laboral y conquistas sociales tuvieron en el mundo del trabajo. Asimismo, la afirmación de los mecanismos de mediación del Estado, en particular el poder que adquiere a partir de 1948 en los conflictos laborales la Secretaría de Trabajo y la propia Eva Perón constituye un vértice que debe ser ponderado al momento de atender las causas del descenso de los repertorios de confrontación obrera”.<sup>34</sup>

Dicha línea de análisis debate contra la idea de sobrevalorar la coacción dentro del gobierno peronista por encima de los procesos de consenso. Pero, en realidad, dicha interpretación es prácticamente inexistente en los estudios predominantes sobre el período. Por el contrario son una falencia historiográfica de los últimos 30 años los análisis que estudien y ponderen la represión, entre los factores que expliquen los orígenes del peronismo. En el caso tucumano, rezagado respecto a los estudios de la zona metropolitana, ese vacío es total.

El presente trabajo se enmarca dentro del objetivo más amplio de sopesar la represión dentro de las interpretaciones sobre el fenómeno peronista y su vínculo con el movimiento obrero. Esta mirada excede el análisis solamente de la represión contra quienes se caracterizaba como adversarios, muchos de los cuales se identificaban con el peronismo, aspirando en cambio a interpretar también la hegemonía lograda en el conjunto de la sociedad respecto a este tipo de accionar. Hegemonía que abarcaba desde su justificación, hasta una resistencia temerosa y poco enérgica entre la mayoría del gremialismo. Tal situación debe ser contemplada en igual medida que los aspectos de consenso logrados por el régimen con la clase obrera y con su dirigencia, a la hora de comprender el pacto entre peronismos y asalariados.

## **Bibliografía:**

- Acha, Omar; Quiroga, Nicolás, *El hecho maldito: conversaciones para otra historia del peronismo*, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2012.
- Arnedo Álvarez, Gerónimo, *Un clamor de justicia en los ingenios*, Buenos Aires, Anteo, 1950.
- Camarero, Hernán, *A la conquista de la clase obrera: los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.

---

<sup>34</sup> Gutiérrez, Florencia, “La dirigencia de la FOTIA y los sindicatos de base: Tensiones y conflictos en el proceso de sindicalización azucarera, 1944-1955”, en Rubinstein, Gustavo y Gutiérrez, Florencia (eds.) *El primer peronismo en Tucumán: avances y nuevas perspectivas*, Tucumán, Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, 2012, p. 153. La cita dentro de este texto pertenece a Doyon, Louise, *Perón y los trabajadores...*, op. cit., p. 294.

- Del Campo, Hugo, *Sindicalismo y peronismo: los comienzos de un vínculo perdurable*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 1983.
- Contreras, Gustavo, "Movimiento obrero, sindicalismo y política durante el primer peronismo", Mar Del Plata UNMDP, 2012 (mimeo).
- Doyon, Louise, *Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.
- Gutiérrez, Florencia, "La dirigencia de la FOTIA y los sindicatos de base: Tensiones y conflictos en el proceso de sindicalización azucarera, 1944-1955", en Rubinstein, Gustavo y Gutiérrez, Florencia (eds.) *El primer peronismo en Tucumán: avances y nuevas perspectivas*, Tucumán, Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, 2012.
- Rubinstein, Gustavo y Gutiérrez, Florencia (eds.) *El primer peronismo en Tucumán: avances y nuevas perspectivas*, Tucumán, Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, 2012.
- Iñigo Carreras, Nicolás, *La estrategia de la clase obrera, 1936*, Buenos Aires, La Rosa Blindada: PIMSA, 2000.
- Pavetti, Oscar, "Sindicalismo azucarero y peronismo (1949)", en Bonano, Luis (ed.) *Estudios de historia social de Tucumán. Volumen I*, Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras UNT, 1999.
- Piliponsky, Esteban, "La gran huelga azucarera de 1949 y la autonomía sindical. El consenso acerca de la represión y la coerción", *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, N° 5, 2014.
- Pont, Elena, *Partido Laborista: Estado y Sindicatos*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984.
- Pucci, Roberto, *Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966*, Buenos Aires, Ediciones del pago chico, 2007.
- Rubinstein, Gustavo, *Los sindicatos azucareros en los orígenes del peronismo*, Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas UNT, 2005.
- Schiavi, Marcos, *El poder sindical en la Argentina peronista (1946-1955)*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2013.
- Di Tella, Torcuato, *Perón y los sindicatos: el inicio de una relación conflictiva*, Buenos Aires, Ariel, 2003.
- Torre, Juan Carlos, *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Walsh, Rodolfo, *¿Quién mató a Rosendo?*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2010.